
POR LA FUERZA DE LA RAZON

Juan Pablo Cárdenas

Está claro. Los hechos más relevantes de los últimos meses confirman que el Octavo Año es el de la consolidación de un Régimen personal y autocrático. Como nunca aparece tan nítida tanta concentración de poder en manos de una sola persona, una sola voluntad. Partidarios u opositores del Gobierno no pueden sino coincidir en que el futuro aparece supeditado -más que a plazos u objetivos- a la capacidad de imponerse o resistirse lo trazado desde La Moneda.

Salta a la vista, por ejemplo, que el Programa Económico se mantiene por expresa voluntad del Jefe del Estado. Pese a los índices adversos o al creciente desencanto de los mismos partidarios del Régimen, seguiremos, al parecer, sujetos al voluntarismo del equipo gestor de dicha política. Lo mismo ocurre en todo orden de cosas.

Dotado por sí mismo de una legislación acorde a sus propósitos, el Ejecutivo -sin más trámite- destierra a otros cuatro chilenos, prescindiendo absolutamente de los derechos que les asisten, de la competencia que podrían tener los tribunales en la determinación de la presunta culpabilidad o sanción y del probado fastidio a medidas como éstas tanto aquí como en el extranjero.

Sujeto todo a la voluntad unipersonal es, ciertamente, difícil prever nuestro futuro. Sin embargo, la persistencia en ciertas conductas represivas hablan de una espiral que en nada asegura el desarrollo de la anhelada paz en Chile.

No nos parece espontánea o producto de ofuscación pasajera la decisión de expulsar a Carlos Briones, Jaime Castillo, Orlando Cantuarias y Alberto Jerez. Tampoco el nuevo proceso de amedrentamiento a algunas organizaciones o líderes de opinión, complementado con la conminación definitiva a la Revista APSI y la sugerente reconvencción a otros medios de prensa. A nuestro juicio, estas medidas persiguen la destrucción de toda alternativa al orden actual que se base en un amplio consenso, en una adhesión expresa a los valores de la democracia y, sobre todo, en una estrategia de acción reñida con el odio y el desprecio por la vida.

Todo indica -contrariando muchas manifestaciones verbales- que el Gobierno busca evitar, a cualquier precio, el surgimiento de



cualquier camino que amenace los reales cimientos del actual Orden, y que no son otros que el poder de la fuerza, así como el innegable desprecio y temor del pueblo por el ejercicio desatado de la violencia.

Lo que realmente parece comprender el Gobierno es que los cuatro expulsados son símbolos de una posición que -a la vez que activa- por lo amplia, demócrata y progresista, pueda dar origen a un frente desafiante de las viejas estructuras y prejuicios políticos que tanto han ayudado a la concepción y mantención del Régimen Militar. Quizás si el valor máximo de estos cuatro nuevos exiliados sea su capacidad de situarse frente a los desafíos del momento y dar las espaldas a un pasado que, naturalmente, gravita cada vez menos en la tarea de pensar un Nuevo Chile y gestar los instrumentos y estrategias adecuadas a las condiciones en que hoy el país se encuentra.

En este sentido, los destierros no pueden interpretarse sino como una muestra de inquietud de un Régimen que busca perpetuarse. Porque, lógicamente, un gobierno sustentado por las fuerzas armadas no es precisamente a la "violencia y el extremismo" que puede temer. Por el contrario, la experiencia de estos ocho años deben tenerlo muy a resguardo de este tipo de manifestaciones.

De allí que, aunque estas medidas estimulen la exacerbación de los ánimos, fatal sería para los sectores disidentes la adopción ahora de conductas o caminos que se confundan con las actitudes extremas en que se quiere ver envuelta a toda la Oposición. Los expulsados han dejado en el país un sinnúmero de voluntades y potencialidades imposibles de ser aplacadas, si se considera que en ellas se están evidenciando todos los valores en cautiverio que las mayorías quieren ver establecidas, por la fuerza más poderosa: la de la razón. ■